



NUESTRA AMÉRICA



La disputa estratégica en una Bolivia en crisis

61

HUGO MOLDIZ MERCADO

EXMINISTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASILADO EN LA EMBAJADA DE MÉXICO DESDE HACE NUEVE MESES

Reactivación de la iniciativa popular de lucha

A más de nueve meses del golpe de Estado que desplazó a Evo Morales de la presidencia del Estado Plurinacional, en noviembre de 2019, y con un gobierno *de facto* y de transición que da señales inequívocas de no quererse marchar y que ha encontrado en la pandemia el mejor recurso para postergar las elecciones por tercera vez consecutiva, Bolivia se encuentra en un momento de alta exacerbación de la lucha de clases que profundiza una crisis política que, junto a la crisis sanitaria y la crisis económica, configura un escenario complejo y altamente explosivo. De cómo se salga de la crisis, caracterizada por una retoma de la iniciativa por parte del bloque indígena campesino, obrero y popular, aunque matizada por señales contradictorias y hasta conservadoras del MAS que pueden ser funcionales a una estrategia distinta a la que se espera del campo popular, pero también de amenazas de desencadenar una ola de violencia desde el Estado y sus grupos paramilitares, la nueva relación de fuerzas permitirá o reemprender la construcción del Estado Plurinacional, con una democracia emancipadora, o retroceder a la restauración republicano liberal conservadora, con una democracia de excepción.

Una revisión crítica de la historia boliviana desde fines de la década de los 70, en los que se transitó del periodo de dictaduras militares de corte fascistoide, salvo dos gobiernos bonapartistas (Ovando y Torres), a un sistema democrático formal, permite identificar que las masas han dado pasos de alto protagonismo político, ya sea directamente o por efectos pertinentes a través de partidos de izquierda, en la medida en que la conquista de la democracia representativa se ha convertido en una suerte de condición previa para avanzar hacia su horizonte histórico: el socialismo.

Al momento de escribir este artículo, el espejo de esta crisis política permite ver que este país sudamericano atravesaba, desde el lunes 3 de agosto, un bloqueo nacional de caminos y una huelga general convocada por el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo a la postergación de las elecciones generales del 6 de septiembre para el 18 de octubre, decidida unilateralmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero también en medio de un despliegue policial-militar que amenaza en desembocar en una masacre, mayor a las de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019 dada la magnitud de la movilización. Y es que no es poco lo que está en juego y, ciertamente, va más allá del día de las elecciones. Desde la década de los 80 nunca un corte de rutas arrancó con más de 75 puntos, y que a la semana se haya duplicado con la participación de decenas de miles de personas, además de una paralización casi absoluta de la ciudad de El Alto y de la popular zona sur de la ciudad de Cochabamba, es un indicador

de que las masas han salido de su letargo, aunque de una forma más desordenada de lo habitual. Un informe de inteligencia militar daba cuenta de que para despejar los caminos y carreteras se necesitaría cuatro veces el tamaño del ejército que se tiene y con un alto costo, a pesar de ello. La situación se vuelve mucho más tensa aún porque ante la negativa del presidente del TSE de adelantar la fecha de elecciones, las reiteradas amenazas verbales del gobierno contra la movilización social, las acciones conjuntas de policías y grupos paramilitares para despejar los caminos en el departamento oriental de Santa Cruz y la intención de crear falsos positivos entorno a una guerrilla indígena, que solo existe en la cabeza de los ministros de Gobierno y Defensa, la respuesta popular ha ido escalando en tiempos cortos y al pedido de elecciones antes del 18 de octubre se sumó la exigencia de la renuncia de la presidenta *de facto*, Jeannine Añez.

Es muy difícil establecer cuál es la puerta de salida, de las muchas que existen, que se abrirá para remontar la crisis, pero no hay duda de algo: tendrá un efecto, casi decisivo, en la realización o no de elecciones de octubre próximo, en el resultado de la "competencia" electoral —si finalmente se llega a dar— y en la determinación del carácter del nuevo gobierno. La victoria o la derrota política que el bloque indígena, campe-



sino, obrero y popular se anote a su favor o tenga que cargar en sus espaldas será la antesala, si se mantiene el histórico comportamiento político de las clases subalternas, de lo que se vaya a manifestar en las urnas. La presencia de las masas, que por no haberla facilitó el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre, se desarrolla en condiciones de un alto grado de recuperación de sus niveles de organización y conciencia, en un contexto caracterizado por el deslizamiento del país al borde del precipicio después de catorce años de estabilidad política y crecimiento económico con justicia social.

Una mirada retrospectiva

Una revisión crítica de la historia boliviana desde fines de la década de los 70, en los que se transitó del periodo de dictaduras militares de corte fascistoide, salvo dos gobiernos bonapartistas (Ovando y Torres), a un sistema democrático formal, permite

identificar que las masas han dado pasos de alto protagonismo político, ya sea directamente o por efectos pertinentes a través de partidos de izquierda, en la medida en que la conquista de la democracia representativa se ha convertido en una suerte de condición previa para avanzar hacia su horizonte histórico: el socialismo. Por eso, una huelga de hambre de seis mujeres mineras aceleró la caída de la dictadura de Hugo Banzer, quien en 1978 se resignó a convocar a elecciones generales dos años antes de su inicial propósito. Lo mismo sucedió en 1979, cuando una poderosa huelga de trabajadores mineros y el bloqueo nacional campesino expulsó en pocos días del Palacio Quemado al general Natusch Busch, quien el 1 de noviembre terminó con el gobierno interino de Walter Guevara. E igual desenlace se tuvo en la recuperación de las libertades civiles y políticas en octubre de 1982, cuando las masas impusieron, en parte, el retorno al Congreso del 80 y la presidencia del reformista Hernán

Siles Suazo, quien había triunfado consecutivamente en las elecciones de 1978, 1979 y 1980. Empero, como siempre, está la otra cara de la medalla: largos periodos de dominación del bloque dominante bajo hegemonía burguesa cuando las masas son derrotadas estratégicamente y no pueden salir de ese estado.

Asimismo, una mirada retrospectiva a la década de los 80 permite apreciar que la imposibilidad de encontrar una salida desde la perspectiva del campo popular a la profunda crisis de Estado que se manifestó en el gobierno de la UDP (Siles Suazo), caracterizada por la contradicción entre un agonizante nacionalismo revolucionario y una emergente corriente neoliberal, dio lugar a la convocatoria anticipada de elecciones generales que terminaron inaugurando dos décadas de gobiernos ortodoxamente neoliberales (1985-2005). La dramática "marcha por la vida" del proletariado minero, en agosto de 1986, buscó frenar la consolidación de esa tendencia, y no pudo. La derrota del proletariado minero, que desde 1952 ocupó la centralidad en el comportamiento de las clases subalternas, arrastró al resto de los trabajadores, facilitó la hegemonía ideológica de las clases dominantes, debilitó a la totalidad de los sindicatos y sepultó a las organizaciones políticas de izquierda. El neoliberalismo fue, de esa manera, hegemonía y coerción al mismo tiempo.

Empero, las aguas profundas que representan el movimiento de la historia tomarían otro curso a década y media después de que Bolivia fuera desmantelada, como ocurrió de igual manera en toda la región desde los 70, por la combinación de modelo económico neoliberal y democracia representativa, siendo esta última el instrumento de legitimación de la profundización de la dependencia de la formación social boliviana a los dictados de los Estados Unidos y los organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde abril de 2000 a mayo-

junio de 2005, pasando por febrero y octubre de 2003, la progresiva y poderosa irrupción social y política de "los de abajo" devino en triunfo político-electoral de Evo Morales en diciembre de 2005, con un porcentaje superior al 54% de votos. Sin todas esas batallas hubiera sido más difícil que las clases subalternas se constituyeran en mayoría social, se elevaran luego a mayoría política y finalmente conquistaran su condición de mayoría electoral. Es decir, sólo la iniciativa política y su incidencia concreta en el campo de la lucha de clases ha posibilitado que las relaciones de fuerza se volcaran a favor de los intereses del bloque nacional-comunitario-popular y que, por tanto, el pueblo fuera poder antes de ser gobierno.

Lo que se evidencia a partir de esas experiencias históricas, con resultados distintos, es que el triunfo o la derrota de las masas, cuando estas se movilizan, determina en mucho el resultado electoral. Cuando la democracia genera y construye un momento de autodeterminación de "los de abajo" y no representa solo un mecanismo de selección de autoridades, el día en que las urnas hablan lo hacen a favor de los proyectos de horizonte emancipador. Y, a la inversa, cuando las posibilidades de abrir un momento constitutivo se apagan por estrategias y tácticas erróneas del campo nacional-comunitario-popular, la democracia representativa termina consolidando las relaciones de fuerza a favor de la reproducción del poder de las clases dominantes. Es más, en ese escenario último, la democracia representativa es, en países como Bolivia, solo un espacio desde donde se trabaja para derrotar estratégicamente cualquier tipo de movimientos populares por muy reivindicativos que sean.

Los bloques en disputa

Pues bien, antes de pasar a describir los escenarios en que se mueve la coyuntura política boliviana, es importante identificar los bloques sociales que están en ardua disputa.

En primer lugar, está el bloque de las clases dominantes, que de un momento de unificación ahora se encuentra fracturado. Después de su exitosa cohesión para derrocar a Morales en noviembre pasado, la derecha, junto a sus clases y fracciones, se dividió en dos grandes grupos: por un lado, la ultraderecha, con tendencias fascistoides, dentro y fuera del gobierno. En ambos casos sus partidos están estrechamente vinculados a la burguesía agroexportadora y financiera que, con profundos nexos con Estados Unidos y Brasil, son las dos fracciones hegemónicas de la burguesía en el bloque en el poder, y a la que se subordinan fracciones de clase media a través de partidos de centro como Sol.bo del actual alcalde la ciudad de La Paz. Por otro lado, está la derecha democrática, nucleada principalmente en Comunidad Ciudadana (CC) como su fuerza política, en la que prevalece la presencia de fracciones de "clase media" de orientación demo-liberal, aunque con una carga muy fuerte de colonialidad, que en los meses de octubre y noviembre pasados se dejaron arrastrar más por su anti-evismo o temor a la profundización del Proceso de Cambio que por sus principios democrático liberales. La diferencia entre la ultraderecha y la derecha democrática en la coyuntura actual es que la primera no quiere elecciones este año.

En el otro lado está el bloque de las clases y fracciones subalternas, en las que cruza transversalmente la cuestión de la identidad indígena u originaria. Este bloque social -clasista e identitario-, desalojado del gobierno el año pasado, milita principalmente en el Movimiento al Socialismo (MAS), aunque en los últimos meses ha dado señales muy fuertes de ir recuperando sus niveles de autonomía, que los había perdido en el Proceso de Cambio. Esta autonomización actual de los movimientos sociales sirve para explicar, entre otras cosas, la percepción y posición distinta que se tiene entre las altas esferas del MAS y la base social respecto del bloqueo de caminos y la puerta de salida: el MAS se inclina en su cúpula a elecciones este 18 de octubre, su base social quiere la renuncia de Añez y elecciones antes del 18. De ahí que en la organización y despliegue de las medidas de resistencia al gobierno *de facto* haya tomado mayor fuerza la articulación Pacto de Unidad y Central Obrera Boliviana (COB) que el MAS propiamente dicho.

Sin embargo, en la actual coyuntura juegan en contra de las clases subalternas las grietas que existen en la táctica y en la concepción estratégica. Y más que la fecha de elecciones también abarcan las posiciones distintas frente a la presidenta *de facto*. Las bases radicalizadas quieren su renuncia, y cada día esa consigna se va generalizando. Al contrario, Evo Morales y el MAS sostienen que la dimisión de Añez postergaría las elecciones un año y

Detrás de la pugna de la fecha de las elecciones generales existe en pleno desarrollo una crisis política que vuelve a colocar en el tablero boliviano la disputa entre retomar el camino de la construcción del Estado Plurinacional, lo que implica una ampliación de la democracia y la marcha hacia un horizonte postcapitalista, o más bien seguir el retorno a un Estado republicano basado en una nueva forma de colonialidad del poder y en una democracia de excepción para que "los de abajo" nunca más osen levantarse contra el poder de la burguesía imperial y señorial. Solo la unidad, el protagonismo, la iniciativa permanente, no caer ante la provocación y la claridad táctico-estratégica le dará la victoria al bloque nacional-comunitario-popular.

que eso implicaría coincidir con los planes de la ultraderecha que no quiere elecciones este año. Pero, quizá el riesgo más importante en una coyuntura de triple crisis -política, sanitaria y económica- sea el MAS como gobierno transitorio -pues este partido tiene el control de ambas cámaras y la sucesión constitucional es clara- con la inexcusable tarea de dar respuestas inmediatas a las expectativas de la gente y al mismo tiempo hacer una campaña exitosa para ganar las elecciones. Pero, quizá también de manera imperceptible, hay otra disputa de fondo: la inclinación electoral, que ya se apoderó del MAS en los últimos años, y la retoma de una mirada más estratégica de clara orientación postcapitalista. Más allá de la fecha de las elecciones y de que el bloqueo de caminos se debilite y se termine de levantar por las contradicciones en el MAS y de esta organización con las bases movilizadas, el riesgo es que la concepción electoralista se imponga sobre la necesidad de una mirada que sea capaz de articular la táctica -que incluye lo electoral, pero no se reduce a ello- y una estrategia exitosa de la revolución boliviana.

La salida a la actual coyuntura

Dicho lo anterior, donde quedan identificados los bloques sociales en pugna, sus contradicciones y sus intereses, es arriesgado señalar cuál será la puerta de salida a la compleja coyuntura política. Lo políticamente correcto es solamente dibujar los probables escenarios. Empero, el primer paso a dilucidar en la resolución de la coyuntura es la forma en que se vaya a resolver el bloqueo de caminos y la huelga general. Una es por la vía de que los movimientos sociales salgan victoriosos de esta pulseta con el bloque dominante, particularmente con los que están en el gobierno. La otra es que la medida de presión desplegada por el bloque de las clases subalternas sea desmontada mediante la represión física de parte del aparato de Estado (policial-militar) y de los grupos paramilitares de Santa Cruz y Cochabamba. Si el principio de la salida va por la vía del campo popular, es que de las dos exigencias -renuncia de la presidenta *de facto* y elecciones generales antes del 18 de octubre-, o al menos una de ellas, se han logrado. Si la salida es por la derecha, en la que el MAS sin desearlo se convierte en una suerte de sostén de la precaria estabilidad de la presidenta *de facto*, es altamente probable que estemos asistiendo a una derrota de dimensiones estratégicas, cuyo primer capítulo se lo vivió en octubre-noviembre de 2019.

Si la intención del gobierno es desarticular la protesta social solo mediante el uso de la represión, es poco probable que prospere. Aunque nunca se puede estar seguro, el despliegue de la violencia estatal a partir de que "meter bala sería políticamente correcto", como sostuvo el Ministro de Gobierno ante la CNN hace unos días, necesariamente implicaría provocar una masacre en uno de los puntos del expandido corte de rutas, lo cual ocasionaría una reacción popular difícil de controlar. El régimen lo sabe, y si no ha actuado hasta ahora es por los efectos negativos que le produciría el hecho represivo a su precaria situación gubernamental y por el golpe mortal a sus escasas perspectivas electorales.



shorturl.at/llpF3



shorturl.at/EPW03

Desde la perspectiva de los sectores de la ultraderecha también está la carta de lo que se ha venido a llamar “golpe dentro del golpe”, que consiste en acabar con el principal —si no único— espacio de pluralidad democrática que existe desde noviembre del pasado año. Es decir, cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), gobernar solo por decretos supremos y clausurar las válvulas que al menos permiten hoy la vigencia de garantías constitucionales, aunque cada vez más recortadas. Es más, hay algunos hechos que muestran la incomodidad que el régimen tiene ante el papel de la ALP que, si bien es una reacción común de la mayor parte de los gobiernos en sistemas presidencialistas o híbridos, en el caso boliviano este rasgo se acentúa ahora por el origen nada democrático del gobierno. Volver a posesionar como Ministro de Defensa un par de días después a quien fue alejado del gabinete tras ser censurado por la ALP; el desconocimiento de la Defensora del Pueblo con el argumento de que concluyó su interinato, contrasta con la designación directa que hizo el régimen de los presidentes del Banco Central y de otras entidades estatales; el ascenso por decreto de varios coroneles al generalato sin que hayan sido ratificados por el Senado, y la no presentación de un informe de gestión ante la ALP, el pasado 6 de agosto, como manda la CPE, son apenas algunos de los hechos que muestran la tendencia. Esta escalada de Golpe de Estado evidentemente tendría por objetivo forzar la realización de las elecciones, impulsar una nueva convocatoria para el siguiente año —que es el deseo de los más duros de la ultraderecha que está dentro y fuera del gobierno—; la proscripción del MAS de la vida democrática, ya sea por las acusaciones, ilegales todas, de haber cometido fraude en las elecciones de octubre del pasado año, o por la participación de sus principales dirigentes en los delitos de terrorismo y/o por el encarcelamiento de sus dos candidatos.

Pues bien, hay factores que complotan contra el deseo y los planes prorroguistas del gobierno *de facto*: la condena creciente de la población a la gestión de la pandemia debido a la ausencia de una estrategia adecuada, la corrupción en la compra de respiradores y la falta de equipos y medicamentos; la inexistencia de un plan económico coherente para enfrentar los efectos que en ese campo produce la pandemia, particularmente en los sectores que viven al día; las denuncias de corrupción en otros espacios del sector público, tales como en las industrias del petróleo y las telecomunicaciones; la pérdida de apoyo de los sectores que la respaldaban, cuya adhesión se traslada a otros dos candidatos de la ultraderecha; la presencia de una derecha democrática que si bien la respaldó en su momento para desplazar a Morales del gobierno, ahora la combate; y, sobre todo, el ascenso de los movimientos sociales que, como en 1979, derrocarían una acción de esa naturaleza.

Pero hay una variante extremadamente peligrosa en esta construcción de una suerte de “democracia de excepción” en la que está embarcada la ultraderecha desde dentro y fuera del gobierno, la cual consiste en inaugurar por la fuerza un largo ciclo de reorientación geopolítica dentro país al tratar de reunir en un solo territorio el poder económico y político. Si bien no se habla de manera explícita, las señales de desenterrar la vieja aspiración de convertir al departamento oriental de Santa Cruz en el centro de la vida nacional se perciben en las declaraciones y acciones de su poderoso comité cívico que el año pasado



arropó a Luis Fernando Camacho, quien se colocó a la cabeza de los planes de desestabilización y derrocamiento de Evo Morales. Estos afanes separatistas fueron impulsados en los años 2008-2009, en la primera gestión del Proceso de Cambio, aunque derrotados por el espíritu y protagonismo nacional de los humildes que, convertidos en sujeto histórico desde el año 2000, establecieron un momento constitutivo en el país que, en 2006, adquirió la forma de Asamblea Nacional Constituyente.

A manera de síntesis, detrás de la pugna de la fecha de las elecciones generales existe en pleno desarrollo una crisis política que vuelve a colocar en el tablero boliviano la disputa entre retomar el camino de la construcción del Estado Plurinacional, lo que implica una ampliación de la democracia y la marcha hacia un horizonte postcapitalista, o más bien seguir el retorno a un Estado republicano basado en una nueva forma de colonialidad del poder y en una democracia de excepción para que “los de abajo” nunca más osen levantarse contra el poder de la burguesía imperial y señorial. Adelantar o mantener la fecha del 18 de octubre para la realización de elecciones no despeja el peligro de fondo: la decisión de derecha -ultra y demoliberal- de impedir el regreso de “los de abajo” a la categoría de gobierno, y si tienen condiciones para postergar —por la vía que sea— el acto electoral hasta el siguiente año, no dudarán, en sus fracciones más radicales, de empujar el carro en esa dirección. De ahí que solo la unidad, el protagonismo, la iniciativa permanente, no caer ante la provocación y la claridad táctico-estratégica le dará la victoria al bloque nacional-comunitario-popular.